



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

ASUNTO	APELACIÓN SENTENCIA - VERBAL
DEMANDANTE	JAIME LEÓN MARÍN RESTREPO
DEMANDADO	GLORIA PATRICIA MIRANDA AGUIAR
DECISIÓN	MODIFICA- CONFIRMA
PROCESO RDO.	05001-31-03-009-2016-00881-02

Medellín, treinta de junio de dos mil veintitrés

ANTECEDENTES

1. DEMANDA: Jaime León Marín Restrepo, por medio de apoderada judicial, presentó demanda en contra de Gloria Patricia Miranda Aguiar, con las siguientes pretensiones:

"PRIMERA: DECLARAR Que entre los señores JAIME LEÓN MARÍN RESTREPO y la señora GLORIA PATRICIA MIRANDA AGUIAR, mayores de edad y domiciliados en esta ciudad de Medellín, existe una SOCIEDAD DE HECHO desde el año 1991, cuyo domicilio ha sido desde su inicio, la ciudad de Medellín.

SEGUNDA: Que se DECRETE la disolución de la SOCIEDAD DE HECHO citada, por solicitud expresa del socio JAIME LEÓN MARÍN RESTREPO.

TERCERA: Que se DECRETE la liquidación de la sociedad de hecho, y se pague a cada uno de sus socios los dividendos y participaciones que a cada uno le corresponda.

CUARTA: Finalmente, señor Juez, sírvase tener en cuenta la relación de bienes que actualmente es de propiedad de los socios JAIME LEÓN MARÍN RESTREPO y GLORIA PATRICIA MIRANDA AGUIAR que se realizó en el hecho décimo noveno de esta demanda".

Como fundamento de lo pretendido, el apoderado judicial de la parte demandante expuso:

a. Desde 1991, Jaime León Marín Restrepo y Gloria Patricia Miranda Aguiar, decidieron conformar una sociedad de hecho, cuyos activos serían aportados por cada uno de ellos, como producto del trabajo mancomunado.

b. Jaime León Marín Restrepo empezó a aportar dinero para cancelar las cuotas de un crédito hipotecario a 15 años que había adquirido Gloria Patricia Miranda Aguiar en 1990 con el Banco Colpatria y la empresa Cementos Argos -donde ella trabajaba-, para la adquisición del 50% de un bien inmueble ubicado en la Calle 28 N° 84-195, apartamento 427, Conjunto Residencial El Mirador de los Alpes, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 001-515370, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, Zona Sur, adquirido mediante la escritura pública N° 4969 de 28 de noviembre de 1990, de la Notaría Cuarta de Medellín. El demandante también aportó \$15.000.000^{oo} para hacer mejoras al apartamento en mención.

c. Luego de que Jaime León Marín Restrepo terminó las labores de administración en un restaurante y Gloria Patricia Miranda fue desvinculada de Cementos Argos, ambos decidieron constituir una empresa denominada "Video Yimmi", ubicada en la Calle 48A #46-80, barrio el Velódromo de Medellín, en que, en algunas ocasiones, trabajaba la demandada y tenían otras personas que colaboraban, pero entre ambos administraban el negocio.

d. El 23 de agosto de 1994, los socios adquirieron, por un valor de \$8'000.000^{oo} un vehículo de servicio público, marca Chevrolet, modelo 1992, de placas TIO257, taxi móvil 1158, afiliado a la empresa Cootransmede. Este dinero fue conseguido por los socios, así: la suma de \$4'000.000^{oo} mediante crédito en la Cooperativa Confiar y los otros \$4'000.000^{oo} con otro crédito en la financiera CODICAR, en que la demandada aparecía como deudora y el demandante como codeudor.

e. El vehículo tipo taxi era conducido por Jaime León Marín Restrepo y con el producido de este, los socios cancelaban las cuotas de los créditos

mencionados, más el pago de la administración, seguros del carro, renovación de tarjeta de operación, gastos de taller y en general todos los costos de manutención del vehículo.

f. En marzo de 2000, los socios Jaime León Marín Restrepo y Gloria Patricia Miranda Aguiar, decidieron abrir un establecimiento de comercio de comidas rápidas denominado "Casitodo", con matrícula de la Cámara de Comercio No. 21-325511-02, ubicado en la Calle 48 #77A -32 de Medellín. Este negocio lo tuvieron los socios por aproximadamente 7 meses y eran inquilinos de la agencia de arrendamiento "Arriendamás".

g. Mientras los socios se dedicaban a administrar y sacar adelante la sociedad, consiguieron a Geovanny, para conducir el taxi de placas TIO257 en el turno del día, quien laboró por 6 meses.

h. En octubre de 2000, los socios decidieron abrir otro establecimiento de comidas rápidas en el Bloque Once, Parque de Belén Los Alpes, Calle 30 #83A-05, para lo cual arrendaron un local durante 8 meses. Allí la demandada Gloria Patricia Miranda Aguiar permanecía la mayor parte del tiempo, mientras que el demandante apenas colaboraba algunas horas al día, ya que continuaba con la conducción del taxi de placas TIO257.

i. A mediados de 2001, los socios iniciaron un negocio con artesanos en puestos móviles y eventos que se hacían en Medellín, Barbosa e Itagüí. En este negocio los dos socios se encargaban del montaje, instalación y compra de los productos para surtir el negocio con juguetería y bisutería.

j. En junio de 2006, los socios vendieron el taxi de placas TIO257 con el fin de adquirir otro vehículo de servicio público y así compraron el taxi de placas TIM275, modelo 1991, por valor de \$22'000.000^{oo}, afiliado a la empresa Coopebombas. Dicho vehículo fue conducido por el demandante Jaime León Marín Restrepo hasta el 09 de septiembre de 2009.

k. En septiembre de 2009, con el ánimo de mejorar los activos de la sociedad de hecho, los socios, de mutuo acuerdo, vendieron el vehículo taxi de placas

TIM275 y adquirieron el taxi de placas TPZ894, Atos, sedán, modelo 2009, el cual fue adquirido por \$66'000.000°. Este taxi siempre fue conducido y administrado por el socio Jaime Marín Restrepo, no obstante, quien aparecía como propietaria era la socia Gloria Patricia Miranda Aguiar.

l. En 2011, los socios tomaron en arriendo un local comercial denominado "Granero el Suyo" ubicado en la carrera 36 N° 39-03, barrio El Salvador de Medellín, a nombre de la demandada e igualmente matriculado a nombre de esta en la Cámara de Comercio de Medellín. Este negocio funcionaba como tienda mixta con expendio de licor y granos. El socio Marín Restrepo, además de que continuó con la conducción del taxi de placas TPZ894, era el encargado de comprar en las Plazas Mayorista y Minorista de Medellín los productos para la comercialización.

m. En septiembre de 2013, el vehículo de placas TPZ894 sufrió una colisión y la aseguradora Colpatria –quien cubría al vehículo culpable del daño-, pagó como indemnización la suma de \$5'300.000° que fue recibida por la socia demandada. En la fecha de recibo de este dinero, todavía se adeudaba 2'800.000° del crédito, pero la demandada Gloria Patricia Miranda Aguiar se negó cancelarlos.

n. En mayo de 2014, el demandante hizo un préstamo por valor de \$5'000.000° para una reparación necesaria del taxi de placas TPZ894 de propiedad de la sociedad; empero, la demandada no quiso reconocer la deuda y correspondió al demandante cancelarla totalmente.

o. El 30 de octubre de 2014, Gloria Patricia Miranda Aguiar, tomó la decisión unilateral de retirar de la sociedad de hecho al socio Jaime León Marín Restrepo y sin invitarlo a hacer la correspondiente liquidación y arreglo de cuentas le quitó el vehículo de placas TPZ894.

p. Los bienes existentes de propiedad de los socios Jaime Marín Restrepo y Miranda Aguiar, son: (i) El vehículo de servicio público, taxi, de placas TPZ894, modelo 2008, marca Hyundai, matriculado en la Secretaría de Movilidad de Medellín y avaluado en \$70'000.000°; y (ii) la suma de

\$15'000.000^{oo} a que el demandante tiene derecho, por la inversión que hizo en créditos hipotecarios y mejoras para el inmueble ubicado en la calle 28 #84-195, apartamento 427, del Conjunto Residencial El Mirador de Los Alpes, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 001-515370, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín.

2. CONTESTACIÓN:

La demandada Gloria Patricia Miranda Aguiar, notificada en forma personal (fol. 85, c.1), contestó por medio de apoderado judicial la demanda y alegó las "excepciones" que denominó: (i) *"Inexistencia de ánimo societario"*, (ii) *"Inexistencia de aporte inicial para la consecución de los bienes o desarrollo de actividades económicas"*, (iii) *"Inexistencia de reparto de utilidades"* y (iv) *"Autonomía de los compañeros en el manejo de sus actividades económicas"*.

También invocó la excepción previa de *"pleito pendiente"*, que fue despachada desfavorablemente por el juzgado de primera instancia mediante auto de 20 de septiembre de 2017 (c.2).

3. SENTENCIA: Mediante sentencia de 06 de diciembre de 2018, el Juzgado 009 Civil del Circuito de Medellín, decidió:

"PRIMERO. -DESESTIMAR las excepciones de mérito (...)

SEGUNDO. -DECLARAR la existencia de la sociedad comercial de hecho entre CONCUBINO, JAIME LEÓN MARÍN RESTREPO y GLORIA PATRICIA MIRANDA AGUIAR.

TERCERO. DECLARAR disuelta la misma y en liquidación.

CUARTO. LEVANTAR las medidas cautelares decretadas en lo que corresponde a la inscripción de la demanda en el inmueble con matrícula inmobiliaria 001-515370 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Sur de Medellín, en la proporción de los derechos que sobre este bien tiene la demandada; como levantar la inscripción de la demanda en el vehículo taxi de placas TPZ984, oficiando a la Secretaría de Movilidad de Medellín, como también se

levanta el embargo y secuestro de los dineros causados y puestos a disposición de este Despacho por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Medellín, dentro del proceso radicado No. 1174 de 2015 (...)"

La funcionaria judicial, señaló que en ese asunto quedó acredita la relación de concubinato entre las partes involucradas, desde el 05 de abril de 1991, hasta el 31 de enero de 2014. Asimismo, precisó que también quedaron acreditados el ánimo societario y la voluntad de repartir el lucro y asumir las pérdidas resultantes de la actividad social.

Al respecto, la juez expuso que los testigos dieron cuenta de que, desde el inicio de la relación, los demandantes, conjuntamente, implementaron muchos negocios, para un bien común que denominaron como "lo necesario para el hogar". Para el efecto, la juez trajo a colación que, con la adquisición y explotación del vehículo tipo taxi, se generaba un beneficio para el hogar y el pago de las cuotas en el banco, así como los gastos de mantenimiento, administración y seguros del rodante y, de manera ocasional, un restante para gastos del hogar. La funcionaria explicó que la prueba documental, da cuenta de que, en la adquisición del crédito para la compra del primer taxi, el demandante fungió como codeudor de la demandada y que, además, era aquel quien figuraba en las facturas de los pagos de administración de dicho vehículo ante Tax Coopebombas Ltda., así como en las compras de elementos para el mantenimiento de los rodantes tipo taxi que adquirieron. Según la juez, las pruebas permiten establecer ese ánimo de lucro y de repartirse no solo las ganancias, sino también la inversión que de las mismas se hacía en el mantenimiento del automotor.

La juzgadora concluyó que el ánimo societario quedó acreditado con las meras declaraciones de parte, en tanto que la misma demandada aceptó que desde 1991, al quedar embarazada del demandante, le entregó a este un aporte y así planearon la adquisición de un taxi, dando cuenta de la ejecución de actos coordinados con beneficios recíprocos.

4. APELACIÓN: Inconforme con lo resuelto, la PARTE DEMANDADA presentó recurso de apelación y al respecto elevó los siguientes reparos concretos:

- La juez erró al asimilar que toda relación concubinaria supone en el fondo la existencia de una sociedad de hecho de índole comercial, lo cual no es cierto, porque existe relaciones de esta clase en las que el ánimo societario no está presente, como en este caso ocurre.

- La autora de la decisión no valoró las pruebas en debida forma, pues los testimonios recibidos en el proceso fueron muy flojos, ya que, en esencia no conocían la vida de las partes involucradas, ni los negocios que tenían. Asimismo, en el interrogatorio absuelto, el demandante no acreditó la existencia de un acuerdo societario, ni el reparto de utilidades y pérdidas respecto a un negocio. La demandada aportó el capital y no se puede decir que por el simple hecho de que Jaime León haya manejado el taxi, se haya generado un reparto de utilidades, máxime que durante todo este tiempo el demandante nunca se ocupó del sostenimiento del hogar común, siempre fue Gloria Patricia quien veló por el sostenimiento del hogar, con ayuda de su hermana Emilse.

El apoderado de la parte recurrente, señaló que el taxi en un momento sí generó un beneficio, pero no para el hogar, sino únicamente para el demandante y los hijos que este tenía por fuera del concubinato con la demandada Gloria Patricia Miranda. Las obligaciones propias del hogar no se suscriben al pago de administración de un carro o cuota de un crédito, sino que supone que debe corresponder a la educación del hijo, al vestuario y alimentación de este, así como al sostenimiento del hogar.

-El despacho de primer grado de manera amplia supuso que el demandante Jaime León Marín Restrepo aportó con su mano de obra a la sociedad, cuando en realidad fue Gloria Patricia Miranda Aguiar, quien, en los múltiples negocios, aportó el capital y también asumió la fuerza de trabajo, como aconteció en la licorera de la 36 y en el Bloque Once de la Universidad de Medellín. Si el demandante ayudó en algunas de esas actividades, lo hizo por la ayuda y colaboración mutua que nace de la convivencia y de la solidaridad de pareja. Además, refirió que los aportes de Jaime León con la explotación del taxi nunca fueron indispensables para obtener o liberar el rodante,

porque este vehículo lo pudo trabajar cualquier otra persona que cumpliera con el pago de las cuotas mensuales.

5. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA.

5.1. La parte demandada –recurrente por pasiva- precisó que para la sustentación del recurso de alzada se valía de los mismos argumentos expuestos en los reparos concretos presentados ante el juez *a quo* y trajo a colación apartes de algunas declaraciones rendidas en el proceso, en las que respalda su inconformidad.

5.2. La parte demandante – no recurrente -, por su parte, solicitó se confirme la decisión de primera instancia, pero pidió que se mantenga vigente la orden proferida por el juez de primera instancia en cuanto al decreto de las medidas cautelares, para asegurar así la efectividad de la pretensión al momento de liquidar la sociedad de hecho, con fundamento en los artículos 590, 591 y 598 del Código General del Proceso.

CONSIDERACIONES

1. PROBLEMA JURÍDICO: En atención al recurso interpuesto, a esta sala corresponde definir, conforme con la competencia restrictiva del artículo 328 del Código General del Proceso, si la parte demandada tiene razón al señalar que la decisión de primera instancia debe ser revocada, en tanto que una debida valoración de las pruebas, permitía llegar a concluir, a diferencia de lo expuesto por la juez *a quo*, que entre el demandante Jaime León Marín Restrepo y la demandada Gloria Patricia Miranda Aguiar, no existió una sociedad de hecho.

2. MARCO NORMATIVO Y DE PRECEDENTES JUDICIALES PARA LA DECISIÓN DEL CASO EN CONCRETO.

2.1. Sobre la sociedad de hecho entre concubinos, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC8225 de 22 de junio de 2016, explicó:

"(...) el concubinato corresponde en Colombia a una institución claramente diferenciada de la unión marital, de tal modo que puede definirse como unión de hecho no matrimonial de convivencia afectiva y común, libremente consentida y con contenido sexual, sin que revista las características del matrimonio o de la unión marital, pero que supone continuidad, estabilidad, permanencia en la vida común y en las relaciones sexuales.

(...) No empecé, esta familia sui géneris, como se advierte, anclada hoy en la regla 42 citada, per sé, no engendra sociedad patrimonial ni de gananciales, tampoco sociedad universal; pero paralelamente o sobre sus hombros, germina una auténtica sociedad de hecho, cuando en la vida de la pareja hay: 1. Aportes recíprocos de cada integrante, 2. Animus lucrandi o participación en las utilidades o beneficios y pérdidas, y 3. Animus o affectio societatis, esto es, intención de colaborar en un proyecto o empresa común; al margen de aquella vivencia permanente con carácter afectivo. En consecuencia, puede existir una relación concubinaria con o sin sociedad de hecho (artículo 98 Código de Comercio).

En esas condiciones, más allá del carácter sentimental o de la simple comunidad marital en la relación de pareja, cuando sus componentes exponen su consentimiento expreso o, ya tácito¹ o "implícito"², derivado de hechos o actos inequívocos, con el propósito de obtener utilidades y enjugar las pérdidas que llegaren a sufrir y, además, hacen aportes, hay una indiscutible sociedad de hecho.

(...) La convivencia o la vida común de una pareja no puede permitir edificar fatalmente una sociedad de hecho, pero si está debidamente demostrada, será indicio del affectio societatis o del animus contrahendi societatis, puntal constitutivo de uno de sus elementos axiológicos. Sin embargo, ese comportamiento no puede aparecer como relación jurídica de dependencia civil o laboral ni como simple

¹ CSJ. Civil. Cas. de 18 de octubre de 1973, G.J.t. CXLVIII, p. 92.

² CSJ. Civil. Cas. de 22 de mayo de 2003, Gaceta J. T. CCXVI, primer semestre, p. 367; significa al decir de esta Corte, en el punto debatido: "sociedades formadas por los hechos", esto es, asentimiento deducido del comportamiento externo y de las acciones que ejecuta la persona, por ejemplo, actos de colaboración o explotación conjunta, operaciones comunes, etc.

indivisión, de tenencia, de guarda, de vigilancia, sino como un trato que ubique a los convivientes en un plano de igualdad³ o de simetría.

De modo que si a esa relación, se suman la participación en las pérdidas y utilidades y la realización de aportes conjuntos de industria o capital, junto con la affectio societatis, refulge una auténtica sociedad de hecho; y como consecuencia, la legitimación vendrá edificada no propiamente como una acción in rem verso, sino como una actio pro socio con linaje eminentemente patrimonial, más allá de la simple relación personal concubinaria”.

En ese sentido, tal Corporación dijo que

"Frente a una demostrada relación concubinaria, por lo tanto, los elementos de la sociedad de hecho no pueden ser apreciados al margen de esa convivencia, sino con vista en ella, pues fuera de no obstaculizarla ni desnaturalizarla, las labores del hogar, domésticas y afectivas, usualmente conllevan actividades de colaboración y cooperación de los socios o concubinos, tendientes a forjar un patrimonio común, precisamente soporte para el desenvolvimiento en otros campos, como el personal y el social”.

En consonancia con lo anterior, en la misma sentencia, reiteró que

"(...) no puede exigirse, en forma tan radical, para el reconocimiento de la sociedad de hecho entre concubinos, que la conjunción de aportes comunes, participación en las pérdidas y ganancias y la affectio societatis surja con prescindencia de la unión extramatrimonial y que no tenga por finalidad crear, prolongar o estimular dicha especie de unión, pues, por el contrario en uniones concubinarias con las particularidades de la aquí examinada no puede escindirse tajantemente la relación familiar y la societaria, habida cuenta que sus propósitos económicos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida como aconteció en este caso, tal como emerge de la prueba reseñada por la censura (CSJ, SC de 27 jun. 2005, rad. n.º 7188; se subraya)”.

Y más adelante, precisó que

³ CSJ. Civil: G. J. XLII, p. 476.

"(...) Como lo reitera la doctrina de esta Corte: "(...) la preexistencia de una sociedad conyugal, no impide la formación de la sociedad de hecho entre 'concubinos', ni su vigencia excluye la posibilidad de otras sociedades entre consortes o entre éstos y terceros, las cuales, por supuesto, son diferentes, por cuanto aquélla surge ex legge por la celebración del matrimonio y es universal".

2.2. Asimismo, en reciente sentencia SC3463 de 15 de noviembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia, reiteró que, en tratándose de la sociedad de hecho entre concubinos:

"(i) la convivencia singular de una pareja, cuando se encuentre cabalmente acreditada, constituye un fuerte indicio del animus contrahendi societatis y así tendrá que valorarse siempre que las contribuciones de los asociados al fin común se desarrollen en un plano de igualdad o simetría y que no estén justificadas en relaciones de dependencia o subordinación, en hechos jurídicos como la comunidad, o en obligaciones previas de custodia, guarda o supervisión.

(ii) los aportes que realizan los consocios, que bien pueden ser de capital o de industria, conforme lo prevé actualmente el canon 98 del Código Comercio, pueden limitarse inicialmente a «una asociación de servicios» o una unión de «brazos para trabajar», bajo el entendido de que «estas asociaciones pueden comenzar con cero pesos, de la misma manera que los cónyuges en el régimen de derecho común quedan gobernados por una sociedad conyugal, la que puede carecer de todo capital en el momento en que se forma»; y

(iii) los aportes de industria bien pueden entenderse conformados por las labores domésticas no remuneradas, puesto que estas se erigen como un factor de indiscutible valía no solo para la conformación, sino también para la consolidación y la prolongación del núcleo familiar. Quien se dedica al cuidado del hogar, permite con ello que su consocio se dedique a la generación de rendimientos, sin desmedro de la unidad familiar".

3. SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO. En este asunto, la Sala desde ahora

advierte, que a la parte recurrente no le asiste razón y, por tanto, la decisión de primera instancia, que declaró la existencia de la sociedad de hecho entre el demandante Jaime León Marín Restrepo y la demandada Gloria Patricia Miranda Aguiar, debe ser confirmada.

3.1. La inconformidad de la opositora se enfocó a cuestionar la valoración probatoria de la juez *a quo*. Empero, contrario a lo expuesto en el recurso de alzada, el tribunal encuentra, en armonía con lo que la funcionaria judicial de primer grado concluyó, que en este evento los presupuestos de la sociedad de hecho entre concubinos fueron acreditados, conforme se pasa a exponer.

El punto de partida de este tipo de sociedades, es la relación personal y sentimental entre los aquí involucrados, calificada en este asunto como entre concubinos, por cuanto el demandante tenía sociedad conyugal vigente para el momento en que convivía con la demandada, lo cual quedó acreditado y no fue discutido en el recurso de alzada. Ahora, está claro -como lo afirma la parte apelante - que la sola relación sentimental, no da pie a la constitución de una sociedad de hecho. Para que se derive una sociedad de hecho entre concubinos, se requiere la concurrencia de los mismos requisitos que se exigen ante cualquier otra asociación que comparta la misma naturaleza fáctica, esto es, la *affectio societatis*, la reciprocidad en los aportes y la comunidad de suertes. Lo único que varía en esta modalidad, es que la causa y el objeto de esa sociedad ya no revisten entidad puramente pecuniaria, sino también familiar (CSJ, SC 27 jun. 2005, exp. 7188). Empero, no se desconoce, como lo tiene reglado la jurisprudencia, que *"la convivencia singular de una pareja, cuando se encuentre cabalmente acreditada, constituye un fuerte indicio del animus contrahendi societatis y así tendrá que valorarse siempre que las contribuciones de los asociados al fin común se desarrollen en un plano de igualdad o simetría y que no estén justificadas en relaciones de dependencia o subordinación, en hechos jurídicos como la comunidad, o en obligaciones previas de custodia, guarda o supervisión"*⁴.

⁴ Corte Suprema de Justicia. Sentencia SC3463 de 15 de noviembre de 2022.

En este asunto, para desvirtuar la existencia de la sociedad de hecho observada por la juzgadora de primera instancia, el extremo demandado insiste en que en realidad Gloria Patricia Miranda Aguiar fue quien, en los múltiples negocios mencionados en el proceso, aportó el capital y también asumió la fuerza de trabajo, advirtiendo que, si el demandante ayudó en algunas de esas actividades, lo hizo por la ayuda y colaboración mutua que nace de la convivencia y solidaridad de una pareja. Al respecto, reprochó la valoración que la juez hizo respecto a las declaraciones de las partes y de los testimonios practicados en el proceso, en tanto sostiene que la juez acogió la versión de los testigos de la parte demandante, quienes no conocían en esencia la vida de la pareja involucrada, ni los negocios que esta tenía y en las declaraciones siempre partieron de suposiciones.

El apoderado judicial de la parte apelante -demandada Gloria Patricia Miranda Aguiar- señaló que la declaración rendida por ella, da cuenta de que no existió una sociedad de hecho entre las partes, porque nunca hubo un acuerdo previo sobre negocios con el demandante Jaime León Marín Restrepo, pues este ni siquiera aportó para la compra del taxi. Además, señaló que la demandada fue quien hizo el aporte del capital para el taxi, con el fin de que el demandante lo trabajara y sostuviera el hogar y que ello desvirtúa la existencia de un acuerdo societario y los aportes del demandante. Este tribunal, por el contrario, encuentra que tal declaración confirma la existencia de la sociedad de hecho y los aportes de cada uno de los integrantes, pues aquellos no consisten únicamente en dinero y en tratándose de la finalidad de la sociedad de hecho entre concubinos, debe tenerse en cuenta que en esta *"(...) no puede escindirse tajantemente la relación familiar y la societaria, habida cuenta que sus propósitos económicos pueden estar inmersos en esa comunidad de vida"*⁵.

En efecto, la demandada Gloria Patricia Miranda Aguiar, declaró que el objetivo de la compra del taxi *"era la manutención del hogar"*, que *"La idea del carro, era para vivir, comer y sostener a nuestro hijo"* (CD 1, audio 2, min. 12 y s.s.). En ese sentido, la demandada afirmó que quien trabajaba el

⁵ CSJ, SC de 27 jun. 2005, rad. n.º 7188.

taxi –y los demás taxis que iban consiguiendo para remplazar el anterior- era Jaime León Marín Restrepo y que este era el encargado de los gastos propios del vehículo, tales como repuestos, reparaciones, cuotas de administración, gasolina y demás. Véase que, de esta sola información, se desprende que, si bien ella aportó el capital inicial y era quien adquiría los créditos ante las entidades financieras –en los que, además, él figuraba como codeudor-, lo cierto es que el demandante Jaime León Marín aportó el trabajo para emprender con ese fin común, que era la explotación del vehículo de servicio público y con el producido cubrir el mantenimiento del hogar. A esto se añade que la demandada refirió que no había un sueldo ni una relación de subordinación con Jaime León para la conducción del vehículo, lo cual significa que ambos asociados contribuían al fin común en un plano de igualdad.

Ahora, en este asunto, se torna irrelevante lo argumentado por la parte demandada, en cuanto a que el demandante nunca cumplió con el objetivo de lograr el sostenimiento del hogar, por cuanto decía que el negocio no le funcionaba y prefería atender las obligaciones adicionales con otros hijos que tenía por fuera de la relación concubinaria, pues ello es tan solo una consecuencia de la conformación de la sociedad de hecho, es decir, que el hecho de que la sociedad no cumpla su finalidad -lo cual no está acreditado en este asunto-, no significa que esta no haya existido. No obstante, pese a que el demandante afirmó que tenía dificultades para cumplir con todas las obligaciones, esto tampoco quiere decir que la afirmación de la parte demandada sea totalmente cierta, en tanto el demandante también afirmó que en la medida de sus posibilidades contribuía al sostenimiento del hogar.

De otro lado, no es cierto que las partes no hayan participado de utilidades, pues en el proceso quedó acreditado que las cuotas para terminar de pagar los créditos conseguidos para comprar los taxis, las pagaba el demandante Jaime León Marín con el producto de la explotación de los mismos, lo cual evidencia el acrecimiento del patrimonio de la pareja, sin que para ello sea necesario un acuerdo previo o directo sobre el porcentaje de repartición de utilidades o la forma o periodicidad en la que lo hacían, dada la forma en que estas sociedades de hecho entre concubinos se constituyen. Al respecto,

véase que la testigo Nancy Elena Marín Restrepo declaró que *"Gloria hacía los préstamos porque tenía más cosa crediticia. Ella sacaba el crédito inicial y Jaime pagaba las cuotas. Yo a veces le pagaba a Jaime. Él me pedía el favor, para ir a pagar a Colpatria"*(CD 1, audio 3, min. 40 y s.s.).

Sumado a lo anterior, como bien precisó la juez *a quo*, el hecho de que las utilidades se reinvirtieran en el mismo proyecto para la explotación de un vehículo para el servicio de transporte, y se asumiera los gastos o pasivos del mismo, da cuenta de que las partes estaban comprometidas con compartir tanto los beneficios como las pérdidas de ese haber social.

3.2. Como ya se anotó, la parte recurrente reprochó que la juez diera credibilidad a los testigos aportados por la parte demandante, quienes, según la inconforme, no supieron dar cuenta de la razón de su dicho, en cuanto siempre partían de suposiciones. A propósito, las testigos Ofir Mesa Correa, Nancy Elena Marín y Cecilia Eugenia de la Hoz Bedoya, refirieron que las partes tenían negocios en conjunto y señalaron que estas, durante el lapso en que sostuvieron la relación sentimental – desde 05 de abril de 1991 hasta 31 de enero de 2014-, trabajaron conjuntamente en negocios como el establecimiento denominado "Casi todo", el local en el Bloque Once, el negocio de artesanías, el local denominado "video Jimmy", el granero ubicado en la 36 y en el proyecto del taxi, haciendo alusión a que los veían compartiendo labores en esos sitios y cada uno cumplía funciones en pro de la actividad que implicara cada negocio. Es de precisar, que dichos negocios, fueron temporales, a excepción del taxi, que en la demanda se anunció como vigente. Ahora, si bien las deponentes no pudieron dar cuenta de los términos concretos y precisos en que las partes acordaron la conformación y funcionamiento de la sociedad de hecho declarada en este asunto, en cuanto no presenciaron directamente lo acordado, lo cierto es que sus declaraciones dan cuenta del trabajo común de la pareja, de ninguna manera desvirtúan la sociedad de hecho ni generan duda sobre la existencia de la misma, por lo que el reproche de la recurrente deviene inane, en tanto la apreciación conjunta del acervo probatorio, permite corroborar la existencia de la sociedad.

3.3. En este orden, en consonancia con lo concluido por la juzgadora de primer grado, en el proceso quedó acreditado que el demandante Jaime León Marín Restrepo, además de su vida conjunta con Gloria Patricia Miranda Aguiar, acreditó que entre ambos se desarrolló un proyecto económico en pro del cual aunaron esfuerzos y aportaron trabajo para obtener beneficios o asumir las pérdidas que de tal combinado se pudieran derivar, en tanto ambos tenían como propósito la mutua colaboración en un objetivo común, que estaba enfocado a que con la explotación de los negocios emprendidos se lograra el mantenimiento del hogar conformado por ellos.

4. Por último, la parte no recurrente -demandante-, al descorrer el traslado de la sustentación de la alzada, solicitó que las medidas cautelares practicadas en primera instancia se mantuvieran vigentes. Al respecto, el Tribunal encuentra que, sin motivación alguna, la juez, al declarar la prosperidad de las pretensiones, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares. Empero, al demandante le asiste razón al pretender que las medidas se mantengan, en tanto el artículo 598 del Código General del Proceso, permite que dichas medidas conserven vigencia en el proceso de liquidación que se inicie a continuación, sin perjuicio de lo que en dicho trámite se considere sobre los bienes que conforman el patrimonio social.

5. Así las cosas, sin necesidad de ahondar en aspectos adicionales, la decisión de primera instancia será modificada, en el sentido de revocar el ordinal CUARTO de la parte resolutive, para que las medidas cautelares practicadas en el proceso se mantengan vigentes. En lo demás, la sentencia permanecerá incólume. Se condenará en costas de esta instancia a la parte recurrente. Como agencias en derecho, se fijará la suma de \$2'320.000^{oo}, equivalente a 2 SMLMV.

DECISIÓN

Por lo expuesto la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE:


PRIMERO. Revocar el ordinal Cuarto de la parte resolutive de la sentencia proferida el 06 de diciembre de 2018 por el Juzgado 009 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la providencia impugnada.

TERCERO: Las COSTAS de esta instancia se imponen a la parte apelante y a favor de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija un valor de \$2'320.000°, que equivale a 2 SMLMV.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los magistrados,



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN